



Bogotá, 20 de abril de 2020.

Señores

Consejo Técnico de la Contaduría Pública, Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Referencia: Comentarios al Proyecto de simplificación, Parte 1.

Respetados señores:

Envío mis comentarios al “DOCUMENTO PARA DISCUSIÓN PÚBLICA: MEJORAS SOBRE EL DUR 2420 DE 2015 – Proyecto de simplificación, Parte 1”.

En mi criterio, la principal ventaja de este proyecto es que eliminaría la contradicción normativa en la definición de Microempresa, de PYME y de Gran Empresa en Colombia.

Como se sabe, una misma entidad puede ser “microempresa”, según la Ley 590 de 2000, que se basa exclusivamente en el nivel de ingresos, pero simultáneamente puede estar clasificada como “PYME” o como “Gran Empresa” por virtud del Decreto 2420 de 2015 (Único Reglamentario en Materia Contable), que se basa en el número de trabajadores o el nivel de activos.

Esta contradicción no es menor importancia dado que genera confusión en al menos tres aspectos clave en los que influye:

- La contratación con el Estado, en relación con el Registro Único de Proponentes, para acceder a las ayudas estatales o de organismos multilaterales,
- Para una variedad de asuntos tributarios como el derecho a recibir el descuento del 25% en renta por inversión en ciencia y tecnología del artículo 158-2 y 256-1 del Estatuto Tributario y sobre la posibilidad de acceder a los TIDIS, según el parágrafo 3 del mismo texto normativo, que les exige ser «Micro»entidades, pero en su contabilidad aparecen como “PYMES” o como

«Grandes empresas», lo que incluso genera discusiones con las autoridades fiscales, así como para fines de la facturación electrónica, el artículo 1.6.1.4.1.10 del Decreto 1625 de 2016 define “microempresas” a las que cumplan con la citada Ley 590 de 2000, .

- c) Para fines comerciales y de entendimiento de las normas contables o de su interpretación en el mercado. Por ejemplo, el solo hecho de tener altas cuentas por cobrar, dado el deterioro de su situación financiera, le obliga a una Microempresa a incurrir en costos para pasarse al Grupo 2.

Dado que un Decreto no puede estar por encima de una Ley o contradecirla, por tener una menor jerarquía, según la denominada “*Pirámide Normativa de Kelsen*”, como criterio internacional adoptado en la legislación colombiana, bien hace el Consejo Técnico de la Contaduría (CTCP) en intentar cerrar esta brecha normativa.

Así, las ventajas de esta propuesta son:

1. Intenta cerrar una contradicción normativa en la definición de microempresas, PYMES y grandes empresas, lo que en la práctica influye en la colisión de competencias entre entidades estatales, en la formalidad y en la simplificación de trámites.
2. Se alinea al Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “*Pacto por Colombia, Pacto por La Equidad*”, en su componente “*Estado simple: menos trámites, regulación clara y más competencia*”, incluido en el apartado “*Pacto por el emprendimiento, la formalización y la productividad: una economía dinámica, incluyente y sostenible que potencie todos nuestros talentos*”.
3. Mejora de forma sustancial el entendimiento y la aplicación de normas contables, toda vez que se alinea con el Decreto 2106 de 2019, cuyos considerandos indican:
 - a. “Que el pacto por una gestión pública efectiva precisa la necesidad de una transformación en la Administración Pública que permita lograr una institucionalidad efectiva, mejorar el desempeño de los sectores e instituciones en términos de eficiencia y eficacia, eliminar las duplicidades y la colisión de funciones y competencias y fortalecer la coordinación y el rol del Estado como agente regulador” y,
 - b. “Que el pacto estructural por el emprendimiento, la formalización y la productividad que busca, entre otros, lograr un Estado simple y una Colombia ágil en la que se reduzcan trámites para garantizar un ambiente de negocios propicio para la formalización empresarial y el fortalecimiento de la libre competencia que “pacto estructural por el emprendimiento, la formalización y la productividad que busca, entre otros, lograr un Estado simple y una Colombia ágil en la que se reduzcan trámites para garantizar un ambiente de negocios propicio para la formalización empresarial y el fortalecimiento de la libre competencia” (Subrayados propios)-
4. Se alinea con la Ley 2052 de 2020 sobre supresión de Trámites, en lo relacionado con un Estado eficiente cuyas normas ayudan al ciudadano a su comprensión y consecuente aplicación.
5. No menoscaba la intención de continuar con normas contables centradas en los *Usuarios Principales*, pues este concepto no se relaciona con un número de trabajadores o de activos, sino con conceptos como el Gobierno Corporativo o la separación entre propiedad y control.

Los estándares globales definen a los *Usuarios Principales* como los que no están implicados en la gestión de la entidad¹, que no estén en condiciones de exigir informes a la medida de sus necesidades específicas², que sean externos³, que estén en un amplio número⁴ y que deban tomar decisiones relacionadas con el suministro de recursos a la entidad⁵. Esto porque muy pocas empresas cotizan en la bolsa en Colombia y las demás tienen como Usuarios Principales a su mismo dueño, a la misma familia o a otros shareholders estrechamente vinculados.

De esta forma, la simplificación contable ayuda a formalizar a las microempresas y a mejorar el entendimiento contable en las PYMES, grupo al cual pertenecen realmente muchas de las entidades que hoy están clasificadas como Grupo 1 por requisitos de forma señalados en el Decreto 2020 de 2015.

En todo caso, un enfoque basado en los *Usuarios Principales* de la información contable no significa que deba obligarse a un gran número de empresas a normas que no le son aplicables.

6. Los topes de número de trabajadores y nivel de activos, actualmente considerados en las normas locales no existen en otros países que también aplican normas internacionales contables.
7. Este Proyecto también elimina dos requisitos que solo existen en Colombia, consistentes en:
 - a. Que una entidad tenga que aplicar las NIIF completas solo por el hecho de exportar o de importar más del 50% de sus ventas o de sus compras, según corresponda. Eliminar este y otros criterios, con el fin de unificar las normas relacionadas, es algo en que hemos venido discutiendo profesionalmente y en la academia.
 - b. Que una subsidiaria tenga que aplicar las NIIF completas cuando su matriz las aplique, cuando los párrafos 1.6 y 1.7 de las NIIF PYMES señalan que esto no es necesario, porque no necesariamente estas entidades están obligadas a la Rendición Pública de Cuentas a Usuarios Principales.

Como desventajas del Proyecto Presentado por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública y alineado con lo señalado en los párrafos precedentes, se tienen, a mi criterio:

1. Limita la posibilidad de una entidad para calificarse como Microempresa, lo que va en contravía de lo señalado por la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1074 de 2015, Único del Sector Comercio, Industria y Turismo, modificado por el Decreto 957 de 2019, puesto que Condiciona a las entidades para calificarse como “microempresa” a que:
 - a. “No realicen transacciones con derivados financieros u operaciones de cobertura”, lo que no es coherente con los requisitos previamente establecidos en las citadas normas superiores.

Por ejemplo, el Decreto 957 señala que en el sector industrial una Microempresa es aquella que tiene ingresos de hasta de 483.034 UVT (\$17.537.998.472), que son empresas cuyas transacciones modernas permiten realizar importaciones y exportaciones u otras transacciones que pueden requerir la celebración de contratos de forward o de futuros, según la modalidad, collars y otros derivados financieros, sin que

¹ [Marco Conceptual NIIF](#) (MC) , NIIF PYMES 1.2B.

² MC. 1.2, NIC 1.7 y NIIF PYMES. P8.

³ NIIF PYMES 1.2b

⁴ MC. 1.8 y NIIF PYMES. P7

⁵ [Marco Conceptual \(MC\)](#), párrafo 1.5 y NIIF PYMES 1.2

por esto se le deba imponer que se califique como una “Gran Empresa” y se les exija aplicar normas propias de empresas que cotizan en bolsa.

- b. *“No realicen transacciones relacionadas con pagos basados en acciones”*, lo que evitaría que un emprendedor o una empresa diseñe estrategias de democratización accionaria con sus trabajadores o que pague eventualmente bienes o servicios. Este requisito carece de explicación clara en el Proyecto, tanto en lo económico como en lo legal.
- c. *“No mantengan ingresos promedio en los tres años anteriores por venta de bienes, arrendamientos, intereses y servicios, superiores a 3.000 smlmv”*.

Este último requisito de 3.000 SMMLV nuevamente establece un tope que difiere de lo señalado en la Ley 590 de 2000 y en su Decreto 1074 de 2015, Único del Sector Comercio, Industria y Turismo, que es el Ministerio al que Pertenece el Consejo Técnico de la Contaduría.

Este requisito de topes, en contravía de normas superiores, devuelve el Proyecto normativo a un conjunto de criterios que por naturaleza siempre serán subjetivos, pero que no deberían generar contradicción normativa por lo explicado arriba como una gran ventaja.

En otras palabras, este proyecto es viable jurídica y técnicamente si se unifican las definiciones de Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa y Gran Empresa que ya están en la Ley, pues sólo de esa manera tendría sentido hablar de “simplificación”: el uso de criterios divergentes seguiría siendo un asunto subjetivo y, por lo tanto, más o menos arbitrario, pero además mantendría las dificultades planteadas en relación con la actual brecha normativa.

El Consejo Técnico ha manifestado que no puede unificarse el criterio contable y comercial con lo definido en el Decreto 957 de 2019 porque este observa topes distintos para empresas industriales, comerciales o de servicios, pero las normas han aclarado que en esos casos se toma la actividad con mayor porcentaje. Además este porcentaje no necesariamente cambia de manera pronunciada en todas las empresas. Si así fuera, no tendría sentido entonces mantener el Decreto 1074 de 2015, Único del Sector Comercio, Industria y Turismo en lo relacionado con los topes del Decreto 957 de 2019. En todo caso se requiere la unificación de estos topes, pues otras definiciones seguirían generando variadas contradicciones.

2. En cuanto a la contabilidad de caja, es acertado que el Proyecto lo haya limitado a las personas naturales, pues se menoscaba la utilidad de la información financiera cuando una empresa aplica este método de caja o el método de caja modificado.

Recomendaría que este método de caja se limite a quienes no sean comerciantes, pero deberían eliminarse requisitos no son claros en el proyecto, como la prohibición de aplicación para las personas que “mantengan inversiones en títulos de renta fija o variable” o a las que “No realicen transacciones en moneda extranjera”.

3. Este proyecto es clave para reducir la confusión en el mercado y las contradicciones de criterios técnicos que generan complejidades y sobrecostos en la aplicación de las normas contables.

Atentamente,
Juan Fernando Mejía.

Contador Público de la Universidad de Antioquia.